

De Echeverría a De la Madrid: ¿hacia un régimen burocrático-autoritario? *

Sergio Zermeño

1. Nota introductoria

En el verano de 1982 participé en el XII Congreso Mundial de Ciencia Política con algunas consideraciones acerca del Estado y el sistema político mexicanos. Meses después decidí entregar este ensayo a la *Revista Mexicana de Sociología*. Me pregunto, como sin duda también el lector lo hará, si vale la pena difundir un material que por el carácter de su referencia objetiva corre el riesgo de una obsolescencia cruelmente acelerada. Decidí que sí valía la pena, porque a pesar de los impresionantes cambios ocurridos a partir del 1º de septiembre de 1982, que en un primer momento me empujaron a “congelar” mis notas, y los no menos importantes que acompañaron la instauración del nuevo gobierno, ha resultado revelador el hecho de que los aspectos nodales de lo que a continuación discuto parecieran estar planteados en los mismos términos hoy que antes de aquel 1º de septiembre (los banqueros acotarían tal afirmación, naturalmente).

Otra razón por la que vale la pena invertir recursos publicando estas notas: la segunda parte del artículo propone un modelo de análisis del sistema político mexicano que, presumo, ayuda a entenderlo en el largo plazo histórico en el presente y con cierta perspectiva futura.

Por lo demás, he profundizado en el estudio de nuestro sistema político aprovechando uno de los momentos más aclaradores de su funcionamiento: la renovación sexenal del presidente de la república a partir de diciembre

* Estas notas forman parte de un estudio más amplio que bajo el título de “De Echeverría a De la Madrid, las clases altas y el Estado Mexicano”, realicé en Washington gracias al financiamiento del Woodrow Wilson Center for Scholars en los primeros meses de 1982 y gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. A Julio Labastida, Abraham Lowenthal y Jorge Heine mi agradecimiento, pues, por haber hecho posible y agradable mi estancia en el Wilson Center; a Susan Lignori, Cecilia Sager, Aurelio Cuevas y Jesús Mantilla, por haber facilitado mi trabajo proponiendo ideas y recolectando materiales de cuya presentación final soy el único responsable.

de 1982 hasta 1988, deteniéndome en los puntos más reveladores de la campaña política que realizó durante nueve meses a lo largo de toda la república mexicana, el candidato a ocupar este máximo puesto por el Partido Revolucionario Institucional.

El título de la ponencia revela el interés complementario de esta indagación, es decir, ¿puede México comenzar a ser "leído" en su quehacer político con los mismos parámetros con que algunos países del Cono Sur han sido analizados? (los regímenes burocrático-autoritarios, para emplear la terminología, hoy universal, propuesta por Guillermo O'Donnell). O, en otros términos, ¿estamos viviendo el final del sistema político latinoamericano más estable, de más antigua data y de más amplia participación popular? Y si fuera así, ¿de qué manera?

2. La tendencia del Estado mexicano y los regímenes burocrático-autoritarios

Sin pretender con lo que sigue que el caso mexicano se encuentre reproduciendo, hoy por hoy, algunos de los rasgos centrales de los llamados regímenes burocrático-autoritarios nacidos con los golpes militares en los países del Cono Sur, permítaseme hacer una amplia referencia al trabajo de Guillermo O'Donnell, quien ha caracterizado con precisión esos ejemplos, buscando definir algunas tendencias que podrían ser esbozadas para el caso de nuestro país: el Estado burocrático-autoritario, dice el autor, es un

sistema de exclusión política de un sector popular previamente activado que queda sujeto a estrictos controles en un esfuerzo por eliminar su actividad en la arena política nacional. Esta exclusión política se logra destruyendo o capturando los recursos (especialmente los encarnados por las organizaciones de clase y los movimientos políticos) que constituían los soportes de esta activación. Además, esta exclusión está orientada por la determinación de imponer un tipo particular de "orden" sobre la sociedad y garantizar su viabilidad en el futuro. Tal orden es considerado como una condición necesaria para la consolidación de la dominación social que el Estado burocrático-autoritario garantiza y, una vez lograda la normalización de la economía, para relanzar el crecimiento económico bajo un patrón de elevada transnacionalización y una distribución de los recursos sumamente desequilibrada. [En particular, la referida exclusión significa] suprimir las instituciones de la democracia política. Todo ello también implica una negación de *lo popular*: prohíbe (respaldando esto por medios coercitivos) cualquier llamado a la población en términos de *pueblo* y, por supuesto, en términos de clase. La supresión de los canales y de las formas de desempeño institucional de acceso al gobierno característicos de la democracia política tiene como objetivo principal la eliminación de los roles y las organizaciones (los partidos políticos entre otras) que han servido como canales para apelar a la justicia sus-

tantiva que es especialmente considerada como incompatible con la restauración del orden y con la normalización de la economía [...]

A través de sus instituciones [el Estado burocrático-autoritario] trata de “despolitizar” las opciones sociales (social issues), manejuéndolas en términos de supuestos criterios objetivos y neutros de racionalidad técnica. Tal despolitización complementa la prohibición de invocar cuestiones de justicia sustantiva en la medida en que ésta se relaciona con *lo popular* (y, por supuesto, con la clase) y puede introducir exigencias “prematuras” e “irracionalidades” que interfieran con la restauración del orden y con la normalización de la economía.¹

En esta primera etapa o etapa de instauración del Estado burocrático-autoritario, el régimen político limita el acceso al gobierno a quienes se encuentran en la cima de las grandes organizaciones (privadas y públicas), especialmente las fuerzas armadas y las grandes empresas oligopólicas.

Es indudable que sería una exageración tratar de acomodar a México dentro de estos parámetros cuando justamente, y a pesar de las manifestaciones recientes de neoliberalismo tecnocrático antipopulista, el régimen sigue asentado en los amplios sectores obreros y populares, sigue manteniendo o incluso fomentando un sistema político sensible a las demandas y a las nuevas modalidades de una sociedad civil en modernización y, en fin, ha podido mantener a los militares en sus cuarteles.

Es de sobra conocido, por lo demás, que los regímenes burocrático-autoritarios fueron capaces de enfriar de esa forma la política e instaurar los rasgos antes mencionados, porque las fuerzas armadas, que se adjudican en tales ejemplos el papel de autoridad estatal, actúan frente a una situación de “emergencia catastrófica”, o que tendía hacia ella, en donde la crisis social podía devenir en guerra civil de dos bandos bien definidos, en unos casos, o simplemente dar paso a una lucha social desorganizada e incontrolable, en otros, etcétera.

La “legitimidad” y la fortaleza del nuevo actor estatal y del nuevo orden impuesto están basadas pues en el hecho de actuar frente a una “nación enferma” y en nombre de su salvación, de manera que mientras más aguda es la crisis que precede a la instauración del régimen burocrático-autoritario, más sólida es dicha legitimación. Con esta fortaleza resultante del papel emergente frente a la catástrofe, el nuevo Estado no se comporta en forma neutra, por supuesto, sino que pasa a actuar como el garante y el organizador de una estructura de clases subordinada a las fracciones más altas de una burguesía transnacional marcadamente oligopólica.

En la organización de este tipo de Estado tienen un peso abrumador dos grupos: los especialistas en la coerción y la tecnocracia especialista en la “normalización” de la economía.

Muy lejos se encuentra el caso mexicano, repito, de este paradigma resultante de las experiencias militaristas del Cono Sur. Sin embargo, si

¹ Guillermo O'Donnell, “Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy”, en David Collier (ed.), *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton University Press, 1979, p. 288, pp. 292-293.

dejamos a un lado la llamada primera etapa de estos regímenes, en donde todo cobra un orden derivado del autoritarismo estatal (como resultado de la situación de guerra interior), y revisamos las contradicciones que el paso del tiempo genera cuando las "razones" de los golpistas comienzan a ser historia semipolvorienta, entonces la utilidad de meter a México en este juego comparativo puede crecer.

En efecto, conocido es que los sistemas burocrático-autoritarios (una vez pasada la primera fase) se ven enfrentados, por lo menos, con las siguientes tensiones:

- En primer lugar, el mencionado "consenso tácito" es una base muy débil como soporte del Estado cuando no puede hablarse más de una "sociedad enferma" y cuando el miedo inspirado por la brutalidad represiva no puede cumplir ya la función de un *shock* paralizante.

- En segundo lugar, dado que la normalización de la economía requiere del mantenimiento de un "clima favorable de inversiones" y que éstas serán provistas por el capital trasnacional y por la más alta fracción de la burguesía, el régimen pierde rápidamente el apoyo ya no digamos sólo de los sectores populares y de la clase obrera, puesto que en la mayoría de los casos nunca lo tuvo, sino de amplísimas porciones de las clases medias, de la pequeña burguesía y hasta de una parte de la iniciativa privada que tan activamente habían apoyado la implantación del régimen militar. Así, las varias presiones derivadas de la desnacionalización acelerada, de la oligopolización que ello implica y de la reducción violenta de la intervención estatal en los renglones de beneficio social y de fomento, tienden a colocar a los detentadores del Estado en una soledad creciente dada la pérdida obvia de aliados y crean un vacío y una gran distancia entre quienes detentan el Estado (la alta burguesía, los intereses trasnacionales, la tecnocracia, las fuerzas armadas y una capa muy delgada de los sectores medios más favorecidos) y el resto de la nación.

- En tercer lugar, en el seno mismo de las fuerzas armadas, cuya función más elevada es la defensa de la nación contra el enemigo exterior, la nueva situación de trasnacionalización del aparato del Estado implicada en la alianza con la alta burguesía y en la normalización de la economía puede provocar obvias escisiones cuando el adversario interior ha dejado de aparecer como un factor amenazante.

En resumen, la implantación del régimen burocrático-autoritario es una profunda derrota para el sector popular principalmente y, al combinarse esto con la supresión de las mediaciones institucionales, pronto quedamos colocados, como dice O'Donnell, ante un silencio y una opacidad de la sociedad civil que dejan al Estado sin sus referentes de legitimación que son la nación, el pueblo y la ciudadanía.

El problema que nos interesa resaltar aparece en este punto con toda su crudeza y O'Donnell lo define en pocas palabras aprovechando una fórmula del ex presidente argentino Videla:

¿Cómo puede ser creado un tipo de mediación que sea capaz de resolver "las dificultades que derivan de la soledad del poder"?

Si alguna versión del PRI [responde O'Donnell], no es más posible [porque su origen fue una revolución popular, justamente lo opuesto a estos ejemplos], si el corporativismo no puede remplazar las mediaciones que están haciendo falta y, en fin, si las resonantes exhortaciones por parte del Estado a la participación se mueren en el silencio de la sociedad, entonces la única cosa que queda es aspirar nada menos que a lo que este tipo de Estado ha rechazado radicalmente: la democracia[...]. Pero ¿qué tipo de democracia?[...] En particular tendría que ser un tipo que mantenga suprimidas las invocaciones en términos de pueblo y clase. Tal supresión presupone que las organizaciones y los movimientos políticos del sector popular sean mantenidos bajo estricto control así como las formas permitidas del discurso y la retórica por parte de quienes ocuparán las posiciones institucionales de esta reapertura democrática[...]. La piedra filosofal debiera ser entonces una forma de democracia cuidadosamente limitada y que, a pesar de prohibir las invocaciones en términos de clase y pueblo, no sea una farsa que no pueda proveer dichas mediaciones y, a final de cuentas, que no provea la legitimidad que pudiera transformarse en hegemonía.²

3. Primera hipótesis: hacia algún tipo de participación restringida

Ya pueden entonces plantearse las cosas con toda claridad. Lo que estoy estableciendo como *primera hipótesis* de desarrollo futuro del sistema político mexicano (de interacción o mediación entre la sociedad mexicana y el Estado), sería un tipo de enfriamiento *paulatino* de la política y de las instituciones que, sin aspirar por supuesto a la drástica redefinición autoritaria del momento de instauración de los regímenes burocrático-autoritarios, pudiera sin embargo ser de alguna manera asimilado en esta segunda fase o fase democratizante de tales sistemas.

Así, viniendo de extremos opuestos (el Cono Sur, de la ausencia total de mediaciones, y México de una herencia masivo-popular obvia con un sistema político activo), ambos ejemplos estarían orientándose hacia algún tipo de "democracia restringida": hacia "la búsqueda de esa piedra filosofal que se expresa", como dice el autor citado, "en los varios adjetivos calificativos que habitualmente acompañan el término 'democracia' ". Así, los chilenos están hablando de que los sectores dominantes de ese país

apuntan a un modelo político diferente de un régimen militar *stricto sensu* [...] una suerte de régimen autoritario de participación restringida, dice Manuel Antonio Garretón, con mecanismos de exclusión y poder tutelar de las fuerzas armadas que [el sector hegemónico del bloque dominante] nombra democracia autoritaria [...]. A diferencia entonces de lo que muchas veces se pensó en torno al "nuevo autoritarismo", en América Latina hay un modelo político en perspectiva que difiere del modelo del régimen militar

² *Ibidem*, p. 296.

aunque necesita de éste como su condición de posibilidad. En él se han plasmado y armonizado las concepciones neoliberales de la sociedad como mercado, las críticas en boga a la “ingobernabilidad de la democracia” y los elementos claves de la ideología de seguridad nacional”.³

Pero si bien el ejemplo chileno, por las condiciones de violencia en que fue instaurado el régimen militar y por su proceso de apertura democrática bastante timorato, no deja de aparecer como algo muy ajeno al caso mexicano, lo acontecido en Brasil hace más pertinente nuestra hipótesis sobre la convergencia.

Y es que sin duda la etapa democratizante que hoy vive Brasil tiene atrás un régimen burocrático-autoritario de mucha más larga data, cuyo momento de implantación no respondió a una crisis y a una emergencia tan dramáticas y en donde, por lo tanto, el sistema político no fue barrido en forma tan radical (permanecieron los partidos o al menos las agrupaciones políticas, algún tipo de parlamentarismo y de juego electoral, un sindicalismo que se mantuvo por sus organizaciones y acciones corporativas), pero fundamentalmente el punto de similitud está dado por el hecho de que Brasil constituye una sociedad ampliamente masivo-popular, mucho más cercana en este punto al caso mexicano que el resto del Cono Sur. En efecto, aparte de los movimientos sociales organizados (huelgas obreras, especialmente de los metalúrgicos en São Paulo), “los últimos años vieron crecer la acción directa por medio de la cual diferentes sectores de las clases populares protestaron contra sus condiciones de vida, a través de la depredación de trenes y transportes colectivos en general, puestos de salud, invasiones de terrenos públicos y privados, ocupación de centros históricos de grandes ciudades, revueltas de peones de la construcción civil, de office-boys, y otras de este tipo”.⁴

De esta manera,

si bien es cierto que la fase que se abrió en 1969, después de la crisis político militar de 1968, representó la consolidación de una tendencia que deseaba expulsar, aparentemente para siempre, a los partidos políticos de las áreas en donde se expresaban los conflictos divergentes de la sociedad, así como una verdadera tentativa de administrar las tensiones sociales por vías autárquicas y, en fin, de suprimir totalmente la política de la vida del país, no hay cómo dejar de admitir, incluso dentro de sus limitaciones, que la fase que se abrió en 1979 se destinó, por el contrario, a iniciar la consolidación de una institucionalidad que, apelando de nuevo a los partidos, implica por lo menos la restauración de un espacio de luchas sociales cuya significación no es irrelevante para las posibilidades de construcción de la democracia en el

³ Manuel Antonio Garretón, “Modelo y proyectos políticos del régimen militar chileno”, ponencia presentada al *XIV Congreso Latinoamericano de Sociología*, San Juan, Puerto Rico, 1981, p. 25.

⁴ José Alvaro Moisés, ponencia presentada al *XIV Congreso Latinoamericano de Sociología*, San Juan, Puerto Rico, 1981, p. 16.

país [algo así como una] democracia de nuevo tipo [...] algo en la dirección de lo que, en el contexto italiano de la segunda posguerra, después de la derrota del fascismo fue llamado de “democratización progresiva”.⁵

¿Nos sería entonces posible completar esta primera hipótesis sobre “la convergencia” agregando que el enfriamiento del sistema político no es más que la expresión a otro nivel del referido proyecto neoliberal, y que todo ello implica la mejor *complementación* entre iniciativa privada y Estado a través del vigoroso brazo tecnocrático? En resumen, de una paulatina pero firme metamorfosis del Estado mexicano en un Estado de clase.

Al menos así comenzaba a quedar claro hasta antes de que López Portillo apareciera en su papel de nacionalizador y populista, tragándose sus palabras respecto a esto último. Por ejemplo, cuando se dio a conocer el nombre del candidato del partido oficial a la presidencia de la república para los años 1982-1988, decía el *Washington Post*:

Miguel de la Madrid ha tenido una larga carrera en la administración pública pero nunca ha ocupado un puesto de elección [...]. De los tres candidatos más presidenciables del partido oficial, De la Madrid ha sido el favorito de la comunidad de los negocios y de los bancos. Esto se reflejó en la bolsa de valores esta mañana con un alza de 10 puntos cuando apareció la noticia, pero fue cerrada después de una hora de cambios [...]. De la Madrid es un descendiente de inmigrantes españoles y a diferencia de la mayoría de los políticos mexicanos que son una mezcla de sangre española e indígena, él parece manifiestamente europeo.

De la Madrid habla fluidamente inglés y se dice que tiene una actitud más abierta hacia los Estados Unidos que la mayoría de los miembros del profundamente nacionalista *establishment*. Como su amigo López Portillo, a quien le gusta describir a México “no subdesarrollado sino subadministrado”, De la Madrid forma parte de un grupo de tecnócratas que piensan que el gobierno mexicano necesita ser modernizado urgentemente y estar orientado hacia el control administrativo más que hacia el tradicional populismo.⁶

4. El sistema político mexicano en la sucesión presidencial

Desarrollar la hipótesis más a fondo no cuesta ningún trabajo, pues en la semana que siguió a la elección del candidato del PRI se hizo patente la existencia de una crisis en la cúpula política mexicana. Héctor Aguilar Camín, en un artículo titulado “¿Y después del PRI?”, asegura:

Vista globalmente, la candidatura es la afirmación de un tendencia: la del poder de la pirámide del ejecutivo sobre las organizaciones sociales y políticas de apoyo del aparato estatal, todo ese territorio de

⁵ *Ibidem*, p. 8.

⁶ *The Washington Post*, 26 de septiembre de 1981.

acción política que evoca la palabra PRI. La candidatura lamadridiana equivale a consolidar una nueva forma de hacer e imponer la política en México, una forma que no pasa necesariamente por las organizaciones priístas tradicionales o que no las utiliza ni las necesita para llegar hasta las bases.

Con el lanzamiento de Miguel de la Madrid, la llamada clase política mexicana perdió por segunda vez consecutiva la sucesión presidencial [...] la candidatura lamadridiana es el encumbramiento final de la burocracia financiera ordenada en torno al Banco de México y la Secretaría de Hacienda en cuyos circuitos transcurrió toda su carrera pública con excepción de su muy decisiva etapa como secretario de Programación y Presupuesto.⁷

Esta tendencia que, como dice el autor citado, ha crecido por fuera de la tradición priísta y de la llamada clase política, contrarió profundamente a los pilares de la "política de masas", a los que asientan sus bases en la fuerte solera popular y nacional de la sociedad mexicana.

En efecto, al saberse el nombre del candidato, Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México (la CTM), y en ese momento presidente del Congreso del Trabajo, pronunció un discurso en el seno de esta organización en donde preguntaba a los líderes obreros de todo el país: "¿cómo vamos a participar en la campaña electoral? ¿Incondicionalmente?", respondiéndose "no", a sí mismo. Unas horas después, en el acto de masas del *destapamiento*, saludó al candidato con la siguiente sentencia: "Ya habrá tiempo para expresarle a usted los puntos de vista del movimiento obrero que tampoco se entrega sin dar a conocer cuál, en su concepto, debe ser un gobierno revolucionario".⁸ Contra lo acostumbrado durante décadas, decía el suplemento *Página* del periódico *Unomásuno*, los obreros que dirige don Fidel no acudieron a "la cargada" sexenal (la entrega incondicional de su apoyo) que suele tener lugar durante los días que suceden al "destape", y no fue sino hasta 15 días después cuando la CTM presentó al candidato sus puntos de vista entre los que se leía: "replantear la alianza establecida entre Estado y trabajadores sobre la base de un nuevo compromiso ideológico que oriente el desarrollo democráticamente".⁹

⁷ *Unomásuno*, 2 de octubre de 1981.

⁸ F. Velázquez, *Unomásuno*, 16 de octubre de 1981.

⁹ En el documento titulado *Proposiciones del Congreso del Trabajo para incluirse en el próximo plan básico de gobierno 1982-1988*, se proponía también, además de la semana laboral de 40 horas con pago de 56, que pasaran a ser propiedad del Estado las industrias alimentarias, químico-farmacéuticas, textil y de la construcción, las instituciones financieras, bancarias y de seguros que son privadas, las industrias extractivas, petroquímica y siderúrgica, el comercio exterior, los bienes de capital, etcétera. Se abogaba por una profunda reforma fiscal, el seguro social, la vivienda y en general por el fortalecimiento del sector social de la economía (*Unomásuno*, suplemento, p. 7, p. 4). Estas *proposiciones*, decía Iván Zacal, "conforman un verdadero programa de gobierno estatificado y progresista y pretenden, entre otras cosas, transformar cualitativamente la naturaleza y los fines del Estado (*idem*).

El segundo hecho que conmocionó al sistema político mexicano fue el desacuerdo manifiesto entre el candidato y Javier García Paniagua, entonces presidente del PRI:

Es del dominio público que desde la dirección del PRI y en gran medida alentado por el fiel de la balanza [el presidente le pidió en varias ocasiones que de ningún modo se excluyera de la lista de precandidatos], Javier García Paniagua hizo campaña en favor de su propia candidatura. Y la hizo con la intensidad política que le es característica, a fondo, comprometiendo en ella todos sus recursos y experiencia, toda su pasión y su seguridad de que había llegado la hora de un nuevo populismo mexicano, duro, hábil, inflexible y dinamizador, conducido exclusivamente por políticos profesionales.¹⁰

García Paniagua, agregaba Aguilar Camín el 15 de enero del 82

es un hombre atado por todos los costados —familiares, ideológicos, operativos y hasta físicos— a las vertientes de una tradición política cuya vigencia es imposible no percibir en amplias franjas de la realidad social y de la cultura política del país: la propuesta de un estilo enérgico hasta la violencia, nacionalista hasta la xenofobia, populista hasta el rencor social, ordenador hasta la rigidez autoritaria [...] García Paniagua se reveló también como el único político de alto nivel que podía timbrar todavía, efectivamente, la tecla del viejo México nacionalista-revolucionario, su profuso populismo, las demandas pendientes de ese país bronco que oscila entre la violencia y la justicia, entre el caciquismo y el consenso, entre la ira y la demagogia [...] Fue el precandidato más vinculado a ciertos altos mandos del ejército, y el político de ese nivel más próximo a la organización de la policía política mexicana, una fuerza cuya importancia en el sistema creció considerablemente durante los años setenta por la guerra secreta que libró el Estado con los movimientos guerrilleros del campo y la ciudad.¹¹

De esta manera, cuando se hizo claro que el candidato sería De la Madrid, Paniagua, presidente del partido mismo que destapaba el candidato, respondió a un reportero del canal 13 que le preguntaba si con De la Madrid escogía la Revolución a su mejor hombre: “Eso vamos a ver”. Mantener esa rivalidad entre el partido y su candidato podría haber sido catastrófico, máxime porque De la Madrid no se detuvo ni un instante y comenzó la integración, a ritmo acelerado, de un vasto equipo, ajeno a la dirección del partido, para manejar la campaña política (de esta manera deben interpretarse los cambios en el área de información y en el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales-IEPES). “Ocurría así, escribió Miguel Ángel Granados Chapa, el absurdo de que en la etapa electoral, donde debiera manifestarse plenamente en actividad, el comité nacional priista carecía de funciones.”

¹⁰ Aguilar Camín, *Unomásuno*, 16 de octubre de 1981.

¹¹ *Ibidem*, 15 de enero de 1982.

Por su parte la dirigencia priísta y obrera pareció también atrincherarse, pues el 9 de octubre, en la XI asamblea nacional que postuló oficialmente al candidato, García Paniagua fue ratificado en la presidencia del partido. Ello se interpretó como un

intento de encarnar la inconformidad del conjunto de la clase política por el lanzamiento de un candidato que no sólo no la representa sino que no parece tener ni siquiera los canales idóneos para ponerse en contacto con ella. Y Fidel Velázquez lo siguió en la aventura. Fidel dijo primero que García Paniagua se quedaría en el PRI porque lo apoyaba el sector obrero y luego aseguró que la CRM estaba ahí para “modelar” al candidato De la Madrid y hacerlo el mejor presidente que hubiera tenido México.¹²

Cinco días después de la asamblea nacional del partido, García Paniagua renunciaba a su puesto pasando al Ministerio del Trabajo mientras que Pedro Ojeda Paullada, titular de esa Secretaría, se hacía cargo de la dirección del PRI. Se esperaba que Ojeda Paullada actuara como un buen conciliador ya que habiendo sido también precandidato a la presidencia representó sin embargo más moderadamente los intereses de la llamada clase política. Al mismo tiempo, mantener a García Paniagua en el gabinete permitía quizás exigir su disciplina en cualquier circunstancia. Por su parte De la Madrid declaró: “No hay fisuras en nuestro partido. Soy amigo de García Paniagua”. Se le preguntó si existía una ruptura con la clase política y contestó: “En forma alguna, mi partido representa la unidad de la clase política mexicana [...] Creo que la clase política se integra por todos aquellos que servimos a la nación y al Estado desde distintas posiciones”.¹³

El suceso había calado demasiado hondo en el cuerpo de la clase política, a pesar de los esfuerzos por guardar las apariencias, y el martes 29 de diciembre García Paniagua renunció también a la Secretaría de Trabajo explicando su decisión como el resultado un “quebrantamiento de salud que me ha venido aquejando durante las últimas semanas”.¹⁴ La renuncia de García Paniagua “sigue recabando firmas y arrastrando eslabones”: el 13 de enero renunció Miguel Nassar Haro, responsable de la policía política, a la Dirección Federal de Seguridad.

¹² *Idem*, 16 de octubre de 1981.

¹³ M. De la Madrid, *Unomásuno*, 15 de octubre de 1981.

¹⁴ García Paniagua, *Excelsior*, 30 de diciembre de 1981. Miguel Ángel Granados Chapa tiene mucha razón al recordarnos algunos datos biográficos de García Paniagua: “Al iniciarse este sexenio el hijo de don Marcelino García Barragán (ministro de la Defensa Nacional durante el régimen de Díaz Ordaz), era sobre todo conocido por esa circunstancia... (pues aunque antes fue senador se enemistó con Echeverría). Su estrella fue elevándose cuando López Portillo asumió la presidencia. La primera encomienda a García Paniagua fue la Dirección Federal de Seguridad, la policía política. Ahí y en la subsecretaría de Gobernación a la que accedió más tarde le correspondió manejar información delicadísima, y encabezar el ajuste de cuentas del Estado con grupos que escogen la vía violenta, o el Estado cree que lo han hecho... Apenas llegado a la Secretaría de la Reforma Agraria se consideraba que no obstante la brevedad de su carrera se contaba entre los precandidatos a la presidencia [...] susci-

Por su parte Fidel Velázquez no arrió banderas con la sola promesa del candidato de incorporar a su programa de gobierno algunas de las demandas contenidas en las Proposiciones del Congreso del Trabajo, y el 9 de diciembre acusó al jefe de la diputación priísta, Luis M. Farías, de ser el responsable, en aquella fecha, de la desintegración de la Cámara “para impedir que pudiera darse lectura a las iniciativas obreras”, y dijo que si no se legislaba al respecto “el movimiento obrero entenderá que se desestima su fuerza y eso seguramente provocará un descontento.”¹⁵

“Los trabajadores tendrán que rebelarse en contra de quienes se oponen a las iniciativas de ley presentadas [...] los señalarán como enemigos de la clase obrera” y les negarán el voto “para siempre, aunque sean del PRI”. Agregó Fidel Velázquez que la Cámara está llena de obstáculos para el legislador obrero y si no se logran esas demandas “la culpa será de quienes no son obreristas y se dicen ser priístas”.¹⁶ Ningún legislador priísta subió a la tribuna para apoyar las iniciativas del sector obrero de su partido “y sí en cambio desfilaron representantes de las fracciones de oposición para solidarizarse con ellas.”

Dos semanas más tarde Miguel de la Madrid, en un desayuno organizado por el jefe de la diputación del PRI (Farías) dijo: “los progresistas somos nosotros [...] no necesitamos arrebatarse banderas”. Fue notoria, constataba la prensa el 30 de diciembre, la ausencia de un nutrido grupo de diputados obreros.¹⁷ En fin, el primer capítulo del año 1982 lo inauguró don Fidel con una invitación a la prensa “para charlar sobre lo que está pasando”. Después de aclarar que no estaba de acuerdo en “emplear la violencia ni buscar enfrentamientos con el Estado” y que no tenía problemas políticos con el candidato priísta, aseguró que el trabajador está “en pie de lucha” para mejorar su situación. Buscamos cambiar la situación actual pero no forzosamente llegar al socialismo que “en la actualidad está muy desacreditado. Queremos un cambio social con democracia, con justicia...”.¹⁸

taba adhesiones entusiastas entre la derecha y reconocimiento entre escritores progresistas. En este último sector sin embargo flotaban, a veces sin expresarlo, dudas sobre el autoritarismo en que podría resolverse, a la vista de sus antecedentes, la firmeza del secretario de la Reforma Agraria. En marzo de 1980 pasó a dirigir el PRI [...] ahí acentuó su retórica de izquierda y al nombrar a políticos de esa filiación (como don Jorge Tamayo o don Arturo Romo en puestos significativos, hizo una opción inequívoca [...]) En círculos próximos a él se ha expuesto que la causa de su desasosiego radica en que habiendo recibido señales de que él sería *destapado*, cuando no fue así la decisión le fue incomprensible e inadmisible. Se trata de una versión muy verosímil, si bien no podrá corroborarse jamás o en el corto plazo su certidumbre”, concluye Granados Chapa (*Unomásuno*, 4 de enero de 1982).

¹⁵ F. Velázquez, *Unomásuno*, 10 de diciembre de 1981.

¹⁶ *Ibidem*, 11 de diciembre de 1981.

¹⁷ M. de la Madrid, *Unomásuno*, 30 de diciembre de 1981.

¹⁸ F. Velázquez, *Unomásuno*, 8 de enero de 1982.

Una semana más tarde, el director de CANACINTRA declaraba, sentenciando, que la ausencia de Fidel Velázquez al frente de la CTM “no provocaría ninguna crisis en las relaciones laborales ni en la vida política del país”, al tiempo que los presidentes de once cámaras industriales de la zona centro del país, declararon que no les preocupaba quién pueda llegar a dirigir la CTM, las instituciones obreras tendrán prevista la posible ausencia de Velázquez porque nadie es eterno.¹⁹ La CTM controlaba entonces la mitad de los componentes priístas del poder legislativo: 43 de los 86 diputados miembros del Congreso del Trabajo, que es el sector obrero del PRI, y 7 de los 14 senadores obreros. El poder de la CTM y de Fidel se mantuvo, en las elecciones de julio de 82, aproximadamente en la misma proporción.

La información da todavía para ir más a fondo con esta primera hipótesis, y es que, a pesar de lo dicho por el candidato, la presencia de Ojeda Paullada en el PRI pareció cubrir una función más bien de ornato mientras que el aparato montado para la campaña desde un inicio con base en el IEPES se convirtió en el eje de acción dentro de la nueva distribución del PRI, y Manuel Bartlett, director de la campaña desde su origen, pasó a ocupar la secretaría del partido.

Al lado de los tradicionales mítines, discursos y manifestaciones populares por los pueblos y ciudades de todos los Estados de la república, De la Madrid decidió realizar 1 500 reuniones públicas a lo largo de la campaña con objeto de examinar el Plan Básico del PRI que el director del IEPES (Carlos Salinas de Gortari) definió como “el producto de una amplia consulta hecha entre los sectores del PRI. Recoge la experiencia que en materia de planeación ha ido generando la administración de López Portillo así como las aportaciones sustantivas del Plan Global de Desarrollo 1981-1982. No es de ninguna manera producto de un pequeño grupo de trabajo o de gabinete”.²⁰

El conjunto de estas reuniones recibió el nombre de *Consulta Popular* y quedó más o menos claro el organigrama: en cada Estado de la república se fortalecerían los llamados CEPES (centros de estudios políticos, económicos y sociales) y otros centros de estudios de menor rango, a nivel de cada municipio, que serían a los CEPES lo que éstos son al IEPES. Es de esta manera como el candidato, a lo largo de la campaña, fue realizando la consulta popular en los diferentes CEPES que se encargaban de recibir las demandas de los distintos sectores del partido y de la población en general expresadas en “ponencias escritas”. Así, el CEPES de Baja California (el sexto Estado de la campaña) recibió 130 ponencias y un tiempo después el candidato se ufana de haber recolectado “217 carpetas de planteamientos específicos y generales sobre el problema del municipio en Puebla”.²¹ En este Estado, De la Madrid expresó:

¹⁹ CANACINTRA, *Unomásuno*, 14 de enero de 1982.

²⁰ Salinas de Gortari, *Unomásuno*, 31 de octubre de 1981.

²¹ M. de la Madrid, *Unomásuno*, 22 de noviembre de 1981.

Me parece que este enfoque de municipalizar el partido y de inducir que a través de nuestros órganos de estudio se hagan los planteamientos de la ciudadanía a través de cada municipio, representa una de las vertientes más importantes de la modernización del Partido Revolucionario Institucional.

Las ponencias que aquí hemos escuchado así como las intervenciones que previamente también oímos en la reunión popular, se incorporan a un proceso mediante el cual analizamos los planteamientos de nivel nacional y éstos se trabajan en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales y aquellos planteamientos que tienen un carácter meramente regional los procesamos en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI en cada entidad.”²²

En esa reunión De la Madrid recibió 125 mil boletas, repartidas días antes en la entidad, a manera de consulta: “se convirtieron en 125 mil demandas de satisfactores elementales”.²³

“En los CEPES como en el IEPES están incorporados no sólo los expertos y los funcionarios, no solamente los teóricos sino también los líderes representativos de los sectores que integran nuestro partido.”²⁴

Pero las dudas volvieron a surgir después de las elecciones, cuando ya con De la Madrid como virtual presidente electo, se hizo saber la composición de las 27 comisiones priistas que harían el Plan de Gobierno 1982-1988. “Lo que más sobresale en las biografías de los coordinadores y secretarios de los grupos que redactarán el Plan es su preparación académica [...] Casi todos ellos hicieron estudios de maestría o doctorado en el extranjero [...] Ese hecho ha suscitado preocupaciones no sólo sobre la orientación tecnocrática que puede tener el plan, sino también sobre su eficiencia y hasta su sentido nacionalista.” A continuación Granados Chapa mostraba ejemplos, dentro de esta lista, de supuestos tecnócratas que se habían destacado más definidamente por sus claras dotes de políticos, pero de cualquier forma concluía: “el riesgo existe [...] Los grandes académicos, títulos de nobleza entre nosotros, pueden en efecto distorsionar la visión de la realidad, en vez de acendrarla”.²⁵

En fin, si sólo se tratara de reconstruir una lógica buscando elementos de apoyo a toda costa, habría que reproducir la siguiente declaración de Miguel de la Madrid, el 17 de enero de este año en Tepic, Nayarit, donde hizo una abierta defensa de la “política nacionalista y revolucionaria de José López Portillo, un presidente responsable —dijo— que evitó caer en las trampas del populismo y la demagogia. De la Madrid condenó al populismo por su falsedad y porque prohija la antidemocracia [...] ‘No dejaremos que falsos apóstoles del agrarismo nos vuelvan a dividir y siembren odio en el campo.’”²⁶

²² *Ibidem*, 12 de noviembre de 1981.

²³ *Unomásuno*, 22 de noviembre de 1981.

²⁴ *Unomásuno*, 18 de enero de 1982.

²⁵ *Unomásuno*, 30 de julio de 1982.

²⁶ M. de la Madrid, *Unomásuno*, 9 de noviembre de 1981.

5. Segunda hipótesis: la doble lógica sociopolítica en un país desarticulado

No faltan, pues, elementos en la política reciente del país para establecer una hipótesis perfectamente coherente que apunte hacia la *convergencia* de nuestro sistema político con esa imagen *tecnoburocrática*, de alguna forma favorable a los intereses de las clases poseedoras y por ello en busca de cierto tipo de democracia restringida, con instituciones políticas semi-congeladas.

Y sin embargo nada hay más falso que querer encerrar al sistema político mexicano dentro de esta lógica sencilla, modernizante, que quiere ver al Estado despojado de sus vestiduras patrimoniales, a salvo de ex abruptos voluntaristas “que siembran intranquilidad financiera en nombre del pueblo”, y cada vez mejor engendrados con el ritmo y las exigencias del desarrollo capitalista acelerado y transnacional. Esta lógica en donde la clase impone su imagen al Estado en nombre de la democracia moderna, de la ciudadanía, del antiautoritarismo de las capas medias, consumistas, individualistas, y en nombre, incluso, de una institucionalización más independiente de la clase obrera (a través de un sindicalismo menos piramidal, etcétera), debe ser completada con lo que sería su contraparte y que podemos enunciar como una lógica masivo-popular: la que recoge y expresa la herencia popular y nacional de un país como México.

Y es que, como lo sugiere esa dilatada presencia del PRI, no estamos frente a un ejemplo en donde imperen fácilmente las clases sociales estrictamente hablando y los sectores medios modernizantes o, para decirlo con un término más global, no estamos frente a un ejemplo en donde los sectores bien integrados al mundo industrial moderno, cultural y políticamente, predominen fácilmente.

Al lado de la lógica democrático-clasista de lo moderno encontraremos siempre la lógica masivo-popular que tiende por naturaleza a mantener caliente el sistema político a través de formas de representación populistas, patrimoniales, caudillescas, caciquiles. Sería un error tomar la salida fácil y postular que estas formas políticas y culturales son sólo herencia de un pasado en retirada, porque el sistema popular y nacional que tuvo lo esencial de sus bases en un campesinado de origen marcadamente indígena y servil ha pasado las estafetas de esas formas supeditadas de representación, de “hacer política”, a los marginados urbanos, a ese ancho mar de la pobreza que en términos relativos fácilmente constituye la mitad de la población urbana y cuyas tendencias futuras no parecen disminuir ni en términos relativos ni en términos absolutos.

Una hipótesis alternativa podría entonces ser postulada: no son las clases altas quienes impondrían al Estado sus intereses, su imagen de sociedad y sus formas favoritas de hacer política, sino que es el Estado el que mantiene el papel hegemónico dentro de nuestro país aunque ese papel hegemónico implica la modernización, la puesta al día de los mecanismos fatigados del sistema político que tiene también que expresar a la parte

del todo social bien integrada al desarrollo y en robustecimiento. Así pues, modernizar no implica necesariamente echar a la basura las formas tradicionales de representación popular ya que, dentro de esta hipótesis, en donde es aún el Estado el agente central del cambio y la dominación, esas bases populares y esas estructuras tradicionales de la política siguen constituyendo fuentes inapreciables de poder y es difícil imaginar un Estado que actúe *motu proprio* en contra de sus bases de sustentación y de legitimidad.

En esta segunda hipótesis que coloca al Estado como el actor central y a la clase en un papel subordinado-favorecido, el campo de la política tiende a aparecer como un Jano bifronte, con una dinámica esquizofrénica que responde a esa doble lógica en que la sociedad misma se encuentra desgarrada, desarticulada. El Estado entonces, por más que su discurso pueda interpretarse como algo incoherente, construye con esa mezcla de elementos desiguales la unidad de la formación social; representa el principio cohesionador de la nación que en sociedades tardío-desarticuladas como la nuestra no ha podido ser llenado, con una mínima continuidad y legitimidad, por ningún actor en el plano de la sociedad civil propiamente hablando. De ahí que pueda decirse que las clases no han sido, en estos ejemplos, hegemónicas.

Así, de la misma manera en que la hipótesis de la *convergencia* puede encontrar argumentos demostrativos abundantes, esta segunda hipótesis, que se esfuerza por mostrar la presencia de una doble lógica del sistema político y de la sociedad mexicana y de un Estado fuerte que impide su desmembramiento, puede también recolectar elementos de apoyo sin dificultad. Concentrémonos ahora en subrayar estos elementos del lado de lo popular-nacional en el mismo plano en que ilustramos la primera hipótesis, pues la selección de un nuevo candidato a la presidencia y, en especial, los ocho meses en que se desenvuelve su campaña, constituyen un momento privilegiado para la comprensión del quehacer político mexicano:

Las siguientes declaraciones de De la Madrid y de su equipo, que fueron tomando forma a partir del mes de noviembre, no sólo son sorprendidas después de lo ya citado sino que muy lejos se encuentran de la idea de refrigerar la política: "Debemos, compañeros —dijo el 17 de noviembre en Nogales, Sonora—, promover la organización y la participación popular en todos los aspectos de la vida social. Es cierto que los sectores del partido cuentan ya con agrupaciones fuertes, poderosas y representativas; pero es tan rápida la dinámica de nuestro desarrollo, que día a día aparecen nuevas formas de trabajo, nuevos gremios que ameritan una organización."²⁷ El partido, agregaba en esa misma fecha Bartlett Díaz, ya secretario del PRI,

debe estar en todos lados [el candidato quiere] que el partido represente las ideas de sus agremiados, que produzca nuevas ideas y nuevos planteamientos para que el partido sea el sostén sólido de un gobierno revolucionario [...] El PRI busca reencontrar sus objetivos, reforzar la

²⁷ *Ibidem*, 18 de noviembre de 1981.

relación partido-militantes y por ese camino ganar los votos de los militantes y de los simpatizantes. Nosotros realizamos una actividad intensa en el interior de nuestro partido. El mitin, las reuniones con el sector popular, con el campesino, con las mujeres, con los jóvenes, son actividades de relación estrecha con los militantes donde se plantea la problemática, se discute, se dialoga, se reafirman los principios y eso fortalece al PRI.²⁸

“Que sepan los grupos más débiles de la población —afirmaba dos días más tarde el candidato—, que no tienen en México mejor abogado que el PRI, porque los representa, los entiende y los quiere servir”.²⁹

Otro elemento de la alta jerarquía del nuevo equipo, el director del IEPES, Carlos Salinas de Gortari, por si todo ello no fuera suficiente, externaba sus opiniones el 19 de diciembre del 82 sobre un punto candente en la tradición de las formas de propiedad en México:

el movimiento cooperativo ha sido un medio importante en las grandes revoluciones sociales de nuestro siglo para fortalecer la organización, la participación, la producción y la justa distribución del ingreso. Para reestructurar las dimensiones políticas, económicas y sociales de la vida de las comunidades se requiere lograr simultáneamente la participación popular y el desarrollo sostenido. Las cooperativas organizadas desde abajo han demostrado ser vehículos importantes para el avance de la comunidad, que promueven iniciativa campesina y poder popular. Es conveniente por ello fortalecer el interés y la participación campesina en una variedad de nuevas instituciones políticas y sociales.³⁰

Estos eran los primeros planteos de lo que quedaría agrupado hacia el final de la campaña bajo el segundo gran tema del “programa de gobierno 1982-1988”: “Democratización integral”. Aquí en el programa se establece, por ejemplo, la necesidad de “fortalecer los partidos políticos que representen una corriente significativa y auténtica de opinión popular”, y así

ensanchar la participación en las decisiones políticas [...]. Preservar y ampliar los medios de expresión de la opinión pública [...]. Promover la participación popular organizada en barrios, colonias y manzanas, para preservar los valores culturales y mejorar la prestación de servicios públicos [...]. Fortalecer al sector social que se ha rezagado con respecto al público y el privado; apoyar al ejido, a la pequeña propiedad y a las cooperativas como células básicas de producción y vida comunitaria...

Y en el plano más estricto de la economía agrícola, el 25 de enero de 1982, “el candidato compró un tigre”, para emplear las palabras de Arturo Warman. Dijo De la Madrid en Tenango del Valle:

²⁸ M. Bartlett, *Unomásuno*, 17 de noviembre de 1981.

²⁹ M. A. Granados Chapa, *Unomásuno*, 8 de noviembre de 1981.

³⁰ C. Salinas de Gortari, *Unomásuno*, 19 de diciembre de 1981.

Durante los últimos años y en forma creciente se han estado desarrollando en nuestro país consorcios a veces transnacionales, que si bien fomentan la integración de unidades económicamente productivas, anteponen su necesidad de ganancias a las necesidades de desarrollo campesino y nacional [...] imponen patrones de consumo también ajenos a las necesidades alimentarias de la mayoría, controlan el proceso productivo de los campesinos, convirtiéndolos en jornaleros en sus propios predios, y han extraído riquezas de los productores directos a quienes más se les imposibilita capitalizarse. Estas formas de intervención empresarial en el agro sólo se justifican cuando apoyan las prioridades nacionales; en consecuencia, el gobierno de la república debe dejar claros lineamientos de política en esta materia. A estos lineamientos deberían de supeditarse todas las intervenciones de la empresa privada en el campo mexicano.³¹

Junto a esto, en Valles, San Luis Potosí, el candidato hizo un reconocimiento del Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y lo corroboró frente a la periodista sueca Aina Bergvall, agregando que “el liberalismo económico es inadmisibile” [...] “Vamos a mantener los controles del Estado, vamos a mantener los controles de precios, pero de manera inteligente [...] El problema del abasto, del consumo popular, será atacado radicalmente”.³² Hacia estas mismas fechas se le escuchó, en Nayarit, la confirmación de que “la Revolución mexicana sigue siendo una revolución agrarista”.³³

En lo que hasta el mes de abril de 1982 fuera, según la prensa, “el discurso más importante de lo que iba de su campaña”, De la Madrid, ante cien mil veracruzanos, objetivando un capítulo más de la “consulta popular” dijo que el suyo sería un gobierno nacional-revolucionario, comprometido con las clases populares y “rector absoluto de la economía”, según se podía leer en los titulares de primera plana de la prensa capitalina del 3 de abril. “La actividad particular y la propiedad privada se apegarán a los imperativos del proyecto nacional.”³⁴

Miguel de la Madrid se internó, incluso, en terrenos pantanosos: “creo que el partido debe fortalecer su actividad ideológica. Lo que justifica a la actividad política es trabajar para las ideas y no solamente para intereses [...] Debemos en consecuencia reafirmar nuestra ideología, la que sostiene la independencia nacional, el nacionalismo político, económico, social y cultural, la democracia integral y la justicia”.³⁵

Las “peras del PRI” llamaría Aguilar Camín a estas declaraciones eufóricas del candidato, exigiéndole una más definida orientación ideológica a esa “asamblea nacional” que es “el partido del Estado”.³⁶

³¹ M. de la Madrid, *Unomásuno*, 26 de enero de 1982.

³² *Ibidem*, 30 de enero de 1982.

³³ *Ibid.*, 18 de enero de 1982.

³⁴ *Unomásuno*, 4 de abril de 1982.

³⁵ M. de la Madrid, *Unomásuno*, 18 de noviembre de 1981.

³⁶ *Unomásuno*, 30 de octubre de 1981.

Como quiera que sea, todos los conceptos citados y los que siguen están muy lejos de una idea neoliberal de inspiración freedmaniana o de algo que pueda asemejarse al modelo burocrático-autoritario: “modernizar —dijo por ejemplo en Monterrey el 5 de noviembre—, es borrar todo vestigio de marginación social. Es distribuir equitativamente la riqueza nacional, la educación y la cultura. Es hacer efectivo el derecho al trabajo y ensanchar la igualdad de oportunidades. Es asegurar y ampliar las subsistencias populares. Es racionalizar los comportamientos públicos y privados. Es acrecentar, en todos los órdenes, la participación popular”.³⁷

Éstos eran sin duda los primeros planteos de lo que terminaría constituyéndose en el tercer gran tema del programa de gobierno 1982-1988; “La sociedad igualitaria”, que resumiría en Ixmiquilpan el 17 de abril en veinte puntos de acción, entre los cuales destaca la reforma fiscal a fondo.³⁸

Todo esto llevó a Miguel Ángel Granados Chapa a decir que De la Madrid había dado “un giro de 180 grados a las tesis desarrollistas que formaron la política económica y social desde los años cuarenta”, y citaba las siguientes declaraciones del candidato en Monterrey:

Es necesario fijar primero los objetivos de educación, salud, vivienda y nutrición [...] así ubicaremos los aspectos sociales como prioridad y objetivo nacional y de esos requerimientos derivaremos el crecimiento económico necesario. El aumento del producto y de la inversión será una consecuencia y no prioridad única [...] invertiremos así el proceso y las prioridades. Hace algunos años todo lo determinaba la disponibilidad de divisas: hoy la prioridad es el hombre, la satisfacción de sus demandas, su realización plena [...] Esta es la tesis social de la Revolución.

Hasta ahora no ha sido esa la tesis social de la Revolución —acotaba Granados Chapa en su comentario—, pero al hacer patente su tesis, el candidato “sorprende para bien a quienes hemos hecho énfasis en el ambiente de conservadurismo hacendario en que se formó”.³⁹ Una semana más temprano, en Aguascalientes, por si las declaraciones anteriores pudieran ser interpretadas como un exceso retórico involuntario pronunciado al calor de una masa eufórica, De la Madrid se comprometió, frente al máximo líder de la clase obrera y un poco haciendo las paces y sellando un pacto con Fidel Velázquez, a “hacer suya la exigencia de la semana de 40 horas y otras medidas propuestas por los cetemistas y esto —dijo—, constituye una prueba de que ya existe un compromiso ineludible, firme, a prueba y seguro de intriga, calumnias y chismes, entre el candidato del PRI y la clase obrera”. Por lo demás era la primera vez durante la cam-

³⁷ Citado por Guillermo Mora, *Unomásuno*, 6 de noviembre de 1981.

³⁸ Los grandes temas de este primer esbozo del “programa de gobierno 1982-1988”, tal como quedaron publicados unos días antes de las elecciones fueron: 1] nacionalismo revolucionario; 2] democratización integral; 3] sociedad igualitaria; 4] renovación moral de la sociedad; 5] descentralización de la vida nacional; 6] desarrollo, empleo y lucha contra la inflación; y 7] planeación democrática.

³⁹ M. A. Granados Chapa, *Unomásuno*, 8 de noviembre de 1981.

paña que Fidel aparecía en público con el candidato y lo hizo nada menos que en el auditorio Fidel Velázquez de Aguascalientes. Las cosas, como hemos visto, no iban a parar aquí; sin embargo, lo que importa aclarar ahora es que incluso desde el cardenismo, las fuerzas mejor definidas de la clase obrera difícilmente se encontraron o se encuentran en la CTM y en el PRI. Siendo la CTM el sector más poderoso y mejor organizado del partido, sería un error considerar a esta central como representante de una fuerza social típicamente clasista y postular que sus actuales exigencias son una imposición surgida de un actor definido en términos de clase sobre el candidato del PRI.

A quien verdaderamente le hablaba De la Madrid, sin querer por ello minimizar al sector obrero que, repetimos, es el sector mejor organizado y con más perspectivas de autonomía dentro del partido oficial, era al liderazgo autoritario-paternalista encabezado por Fidel Velázquez y el charismo, reforzando y avalando, de esta manera, las formas de control piramidal-patrimonial sobre la masa trabajadora y sirviéndose de ellas como las bases más firmes del poder del Estado.

Es porque existe esta lógica masivo-popular tan acendrada y tan extendida en la sociedad mexicana y en el carácter sumiso, plebeyo y levantisco del pueblo mexicano, que no puede ser modernizado en el sentido tecnoburocrático el Estado y el sistema político y que esa gran olla populista y pluriclasista que es el PRI no sólo no puede ser desmantelada, enfriada o ignorada sino que se impone, con su producción inaudita de poder, a cualquier proyecto de Estado propuesto de manera realista como tal.

6. Las bases sociales del eje Estado-pueblo

Por momentos uno tiene la impresión de que se ha llegado a un punto, especialmente en la sociología latinoamericana, en el cual términos o conceptos como populista, patrimonialista, masivo-popular, nacional-popular, corporativo, pluriclasista, autoritarista, paternalista, están haciendo referencia a algo que tiene mucho en común pero que al mismo tiempo designa fenómenos altamente contrastantes cuando se les ve comparativamente y ello conduce a que cada quien entienda a través del mismo concepto cosas totalmente distintas.

Por eso, ya que he empleado todos esos términos, sería bueno ver con ejemplos tomados de la narrativa misma de la campaña presidencial, en qué radican los omnipresentes mecanismos de generación de poder que son la razón misma del PRI y del Estado en tanto expresiones que derivan ampliamente de una lógica masivo-popular. En noviembre de 1981, Tereza Gurza escribía:

El lunes pasado el PRI entregó 6 mil lotes en la Quinta Zona de Ecatepec, en el Estado de México. Los terrenos pertenecen a la nación [...] en el antiguo Lago de Texcoco, a un lado del canal del desagüe,

y fueron dados a quienes durante dos años, “sin fallar ni una sola vez” estuvieron presentes en los actos priístas “haciendo bulla” y aplaudiendo en honor de los candidatos del partido oficial.

Radiante su cara sucia, rodeada por seis mugrosísimos chiquillos, una mujer que prefiere no dar a conocer su nombre destrenza con boca y manos un mecate que luego pasa por cuatro palos que forman los linderos de su nueva propiedad. Explica mientras tanto que “en veces” ya se sentían cansados, aburridos “de ir a las salidas del PRI”. Pero la necesidad de vivienda los decidió a mantenerse *firmes* y al fin lograron que se les diera un lote. Hubo una entrega previa en febrero, pero sólo a unos cincuenta “para subirles el ánimo” y que vieran que el PRI sí cumplía y que todos iban a tener su terreno [...]

Pasea una y otra vez su mirada sobre el lote de ocho por quince metros, sin ningún servicio, por el que tendrá que pagar al PRI, “además de seguir saliendo a los actos políticos”, mil quinientos pesos al mes “hasta que se acabe la cantidad total del precio” que no se sabe aún de cuánto será aunque eso sí ya les avisaron que mayor de 75 mil pesos [...]. “Todo empezó, comenta la señora, con juntas en la casa del señor Marcial Rojas en donde nos apuntaban en una lista; en el PRI no nos llaman por nuestro nombre, sino por nuestro número. Él [Rojas] antes no era nada, pero ahora es diputado suplente por el xxxii Distrito; pero el mero mero nuestro es el licenciado Vicente Coss; él es quien decide a qué actos tenemos que ir a aplaudir y a quién se apunta en la lista, y a él se le entrega el dinero de los diez mil pesos”.

Todo ese tiempo, una vez fijados el día y la hora de la *salida*, los camiones llegaban a recogerlos en casa de Rojas: la frecuencia era de dos a tres veces a la semana [...] a los más animados se les seleccionaba para la porra y, por eso, “nos tocaron ahora los mejores terrenos”. A los que faltaban una sola vez los borraban de la lista, pero si iba un familiar en su lugar sólo los amonestaban.

La noticia de la entrega se ha corrido entre los marginados de Ecatepec, pero “las listas están cerradas hasta dentro de cinco años” [...] Surgen entonces de allá y de acá los *tips*, las sugerencias: “vaya usted a la colonia Joya de Oro; ahí quien quita y tenga suerte. Hable con el señor Juan Román, quien es el que controla esa colonia.”

Llega un nuevo rumor y la gente corre porque dicen que allá en la carbonería, cerca de donde en febrero se dieron los primeros cincuenta lotes, están el señor Huerta y el señor Marcial, “que para decir a qué hora es la salida para el DF y los actos de De la Madrid” y que “entonces sí, a lo mejor ellos pueden abrir otra lista”.⁴⁰

Es así como el Estado y el partido del Estado han abierto una vasta, casi infinita, veta de apoyo y movilización política al combinar la pobreza extrema y la ignorancia azorada en busca de integración al medio urbano. Se trata sin duda de un nuevo agrarismo, de un *agrarismo urbano*, que ahora en lugar de repartir hectáreas en el campo reparte lotes de ocho por quince metros en la ciudad o más bien ni siquiera eso, porque lo que reparte son préstamos para que esos lotes sean pagados. Pobreza e incultura

⁴⁰ Teresa Gurza, *Unomásuno*, 12 de noviembre de 1981.

que se reproducen más que proporcionalmente en el medio urbano aseguran un largo futuro para esa lógica masivo-popular, paternalista, autoritaria y estatista de la sociedad y de la política en México.

Pero tomar sólo en cuenta a la pobreza urbana sería parcial, ¿qué hay de esa profunda herencia campesina e indígena que constituye la raíz de todas estas formas más o menos modernas, más o menos urbanas, de todos estos "neocarcaísmos?"

Quizás los siguientes pasajes del reportaje de Luis Gutiérrez en el *Unomásuno* sean, en el contexto de nuestro trabajo, un ejemplo demasiado límpido por demasiado indígena en una sociedad tan heterogénea. Constituyen sin embargo un ingrediente del mestizaje que tiñe a la sociedad mexicana con distintas intensidades y es un buen testimonio de lo que queremos subrayar:

A las once y media de la mañana la plaza principal de Huauchinango está a reventar de indios, treinta mil, cuarenta mil quizás [...] de la zona norte de Puebla, de sus diecisiete municipios [...] "¡Avancen!, ¡Avancen!" Siguen llegando indios a Huauchinango cuando el candidato sube al templete y Gustavo Gómez Pérez, diputado federal, quizá el más joven de la legislatura de Farías, arenga a los indios:

"—¡Éste es nuestro candidato! ¡Aquí está el candidato de la revolución! ¡Abajo las mantas para que nuestro candidato pueda ver la multitud!" Unos danzantes que vienen de Xilocuatla andan perdidos, desorientados. Les dijeron que vinieran y aquí están. ¿Pero quién les va a pagar? Además: ¿A qué vinieron?

A los de Agua Fría los trajo en su camión de redilas don Wenceslao Vázquez.

"¿Cuánto? [el reportero se refiere a cuánto les van a pagar por haber venido].

"Quién sabe. Hable con el comisario ejidal, Eutemio Trinidad Reyes, que hizo el arreglo."

El reportero hizo a diez indios, en diferentes partes de la plaza, la misma pregunta cuando el reloj daba las doce, las doce y diez [...] En algunos morrales hay tortillas con arroz. Otros vienen vacíos [...] José Zubire Montiel, alcalde de Agua Fría, ofreció tortas, pero después del mitin. "Si las damos antes se nos van estos cabrones", dice uno que parece testaferro del alcalde.

Pantalones de manta, manta con pretensión de pantalones, y en todos, absolutamente todos, esa mirada cargada de tristeza: póngase aquí. Colóquese allá. Muévase al otro lado, levanten las mantas. Bajen las mantas. Y los indios, joder, se ponen, se colocan, se mueven, levantan, bajan.⁴¹

Uno de los elementos más definitorios de la lógica masivo-popular, pero más que eso, del principio del Estado fuerte mexicano, es entonces la presencia de una pobreza generalizada con ese ingrediente indígena de larga data más puro o más mestizado, que constituye su esencia. Junto a la

⁴¹ Luis Gutiérrez, *Unomásuno*, 22 de noviembre de 1981.

pobreza otros dos factores explican por qué, en este ejemplo, la relación de fuerza favorece más decididamente al Estado y no a la clase (a la burguesía en su conjunto). Esos dos factores son: un dinámico ritmo de desarrollo impulsado hasta hace muy poco por la explotación petrolera y un nacionalismo que sigue encontrando sus bases en la política internacional, por un lado (en este momento en la defensa de Centroamérica), y, por otro, en la vecindad con Estados Unidos y la real o potencial amenaza que ellos significan tanto para la región (Centroamérica), como para aquellos recursos (el petróleo mexicano).

Así, pues, pobreza, petróleo y nacionalismo constituyen hoy, y aseguran en el futuro, la relación pueblo-Estado como una relación muy viva, compitiendo con esa otra lógica que es la de la modernización, la del fortalecimiento de la sociedad civil y esto no sólo en lo que hace a los sectores medios consumistas sino también en lo referente al robustecimiento de las clases fundamentales.

El PRI, en estas condiciones, sigue sin duda vigente pero el grado de tecnocratización que requiere el personal del Estado hace del partido hoy un aparato poco adecuado para cumplir su función de productor de cuadros y de canal de comunicación hacia los altos puestos de dirigencia. Su función es otra: la campaña ha mostrado, dice Aguilar Camín, que "el PRI ha dejado de ser la escalera fundamental de acceso al poder en México. La campaña prueba a su vez que como instrumento de movilización despolitizada el aparato priísta está intacto y probablemente hasta ha ganado en ramificación y eficacia".⁴²

En resumen, el PRI es relativizado por el avance de lo moderno y lo moderno por el PRI. Por otra parte, esta combinación de factores que asegura un papel central a la tecnoburocracia, derivado del dinamismo en el desarrollo y del ingreso petrolero (que no por haber disminuido deja de ser fundamental), pero que además ubica a dicha tecnoburocracia en el interior de un Estado fuerte y con una extensa sociedad de masas paupérrimas en su base, implica otros tantos peligros que Octavio Paz ha puesto de manifiesto cuando afirma, por ejemplo: "el petróleo nos ha dado un plazo y debemos aprovecharlo [...] A mí lo que me da más miedo con el petróleo son los planes gigantescos. Un Estado enriquecido con el petróleo debe vencer la tentación más poderosa: la megalomanía [...] Sólo la crítica pública y libre puede frenar a los faraones tecnocráticos."⁴³

Las palabras de Octavio Paz tienen un alto significado en este momento porque son alimentadas por un doble proceso: primero por el impresionante ascenso del Estado en el terreno de la economía nacional y, segundo, por la aguda crisis financiera por la que atraviesan algunos grupos de la iniciativa privada especialmente el grupo ALFA en Monterrey.

⁴² Aguilar Camín, *Unomásuno*, 31 de octubre de 1981.

⁴³ Octavio Paz, entrevista de Antonio Marimón, *Unomásuno*, 18 de noviembre de 1981.

7. Estado y clases altas en la perspectiva sociohistórica

Esto permite que pasemos a un nuevo plano y nos acerca a nuestras conclusiones. Lo que ya se encuentra implícito en las páginas anteriores es que el sistema político, la sociedad y el Estado mexicanos no corresponden a un tipo de dinámica histórica que haya tenido que funcionar en los extremos, es decir, ni golpistas financieros que sientan las bases para un régimen burocrático autoritario (Estado de clase), ni faraones tecnocráticos todopoderosos por encima de la sociedad civil.

Sin duda alguna el futuro de la política en México dependerá de este equilibrio. Y no es que esté proponiendo mediaciones a toda costa entre Estado y burguesía, entre Estado y sociedad civil, entre economía dirigida y libre empresa o entre socialismo y capitalismo, sino simplemente lo que trato de poner en claro es que no parece lo más adecuado establecer hoy la política en términos de una "disputa por la nación" entre nacionalistas revolucionarios y neoliberales, entre monetaristas y estructuralistas, etcétera. La sociedad mexicana comporta una doble lógica sociopolítica y sólo a partir de la comprensión adecuada de esa doble lógica (espectro de una lógica múltiple), pueden intentarse cambios en una vía que, para decirlo de alguna manera, al mismo tiempo que oriente al país democráticamente aproveche la profunda coherencia que le imprimen lo popular y lo nacional.

Desafiar los parámetros impuestos por este funcionamiento paralelo, es decir, querer inclinar la balanza hacia alguna de las dos lógicas, resulta a todas luces catastrófico.

Las dos vías que las clases altas han intentado tratando de someter al Estado a sus intereses y orientaciones, estuvieron cerca de provocar un desplazamiento global del sistema.

A. La ruptura de las distancias

El mejor ejemplo de una de estas vías fue el "golpe de Estado financiero" de 1976⁴⁴ que, de haber continuado su escalada de agresiones y respuestas contra el echeverrismo, y desde el echeverrismo, y de no haber estado

⁴⁴ En los últimos diez años la iniciativa privada (léase los principales centros económicos privados), se ha enfrentado al Estado mexicano en cuatro ocasiones definidas (1973, 1976, 1981 y 1982). En la segunda de ellas, 1976, el choque de las dos posiciones fue tan severo que permitió a los estudiosos del sistema político mexicano hablar de un golpe de Estado financiero mediante la fuga de dinero (calculada en cuatro mil millones de dólares) y la larga especulación monetaria, factores ambos que impusieron ese año una devaluación de alrededor del 100%. Los orígenes del cuarto enfrentamiento, como se sabe, no fueron tanto la desconfianza política cuanto la libertad que los mecanismos de la economía permitían para la fuga de divisas, pero naturalmente el resultado último sí fue un enfrentamiento político entre el Estado y la iniciativa privada.

cerca el cambio de gobierno (lo mismo podría decirse de los últimos meses del lopezportillismo), fácilmente hubiera desembocado en alguna de las salidas siguientes, o en una combinación de ellas:

a] Una reacción populista desesperada por parte de un Estado que ve seriamente amenazada su continuidad pero que se sabe heredero de amplias masas de apoyo y que apela a ellas, movilizándolas, para neutralizar la prepotencia económica de las clases altas y su natural alianza con los intereses extranjeros privados y públicos. Lo que en la pureza populista de el cardenismo fue factible, ya bajo el régimen de Luis Echeverría pudo haber derivado, a su vez, en cualquiera de las opciones b], c], o d].

b] Un enfrentamiento catastrófico de fuerzas iguales, es decir, una polarización entre, por un lado, la alianza popular-estatal antes referida y, por otro, los sectores poseedores a todos los niveles que van ampliando sus apoyos en el vasto espectro de la pequeña burguesía y de las clases medias sirviéndose de su control sobre los mass-media (haciendo aparecer más amenazantes los ataques reales y potenciales venidos del Estado contra la propiedad), obteniendo de esta manera el apoyo creciente del llamado sector mejor integrado al desarrollo y atrayendo, incluso, a ciertos sindicatos obreros de punta (activando esa "hegemonía fáctica" del capitalismo a que se ha referido Norbert Lechner).

Pero esa vía de polarización catastrófica, que fácilmente puede calificarse como la vía allendista, podría no ser la salida más obvia en una crisis como la mencionada, aunque el echeverrismo haya sido extrapolado de esta manera bajo la influencia del derrumbe de la Unidad Popular.

c] La historia demuestra que la vía mexicana en lugar de conducir hacia esta especie de "lucha de clases organizada", hacia este equilibrio, aunque sea catastrófico, pero con fuerzas que se organizan y se pertrechan, que establecen su lucha en un plano más o menos homogéneo (izquierda-derecha, etcétera), en lugar de esto, repito, la vía mexicana ha conducido rápidamente (aunque su origen pudiera ser similar al anterior), hacia un tipo de "lucha desorganizada" que rompe la preeminencia de las clases y los actores integrados para dar paso a una explosión popular devastadora, al volcán plebeyo que tuvo su primera gran erupción en la Guerra de Independencia (con su medio millón de muertos), que se reactivó durante las guerras de la Reforma y de Intervención y, naturalmente, con la Revolución mexicana, doblemente mortífera que cualquiera de las anteriores. Faltan bastantes estudios de esto que he llamado "el comportamiento plebeyo del pueblo mexicano", pero sin duda es este fenómeno el que explica en muy buena parte la débilmente estructurada dominación de las clases altas en este país, arrasadas durante la Independencia, la Reforma (si por sistema de dominación se puede entender también a la Iglesia), arrasadas sin duda durante la Revolución y finalmente en el cardenismo. Claro está que esa debilidad en un sistema clasista de dominación (Junker, farmer, aristocrático, oligárquico, burgués...) explica a su vez (¿dialécticamente?)

la propensión “levantisca” de las masas populares, cuyo apaciguamiento, disciplina y sumisión sólo fueron logrados, una y otra vez, por la ley del más fuerte, la de la facción triunfadora y, en consecuencia, por la ley militar-caudillesca, que es una lógica estatal como toda lógica de guerra, y no clasista. A la amenaza constante a la soberanía nacional y a la movilización permanente de las masas populares contra el enemigo exterior se sumaron los rasgos mencionados y ayudaron a profundizarlos, templando, entre otras cosas, el férreo nacionalismo mexicano. Si a esta herencia levantisca y plebeya, y a esta profunda debilidad de las clases altas y de su sistema de dominación agregamos, entonces, el tercer factor característico del caso mexicano, que es la guerra o amenaza exterior (principio estatal por excelencia), tendremos los elementos para mostrar qué entendemos por “propensión hacia una lucha social desorganizada”, en donde el eje pueblo-Estado (desbordamiento popular-lucha social descompuesta-restauración de un orden por la vía de la guerra y del principio autoritario estatal) impera ampliamente sobre una vía de lucha social organizada (enfrentamiento de fuerzas bien pertrechadas en el plano de la sociedad civil e intervención militar sólo como un elemento exterior a este plano cuya dinámica es esencialmente social y responde a un enfrentamiento en esencia clasista).

Así pues, más que en allendismo, más que en cordobazo argentino, debiéramos pensar en esa fuerza popular desbordada que mostraron los cinturones de miseria durante el “limazo”, o debiéramos pensar también en algunos rasgos que hicieron del Estado brasileño un actor poderoso durante el populismo y lo refrendaron así durante la dictadura militar a partir de 1964, sólo que, en el caso mexicano, digámoslo otra vez, habremos de agregar: la debilidad más acentuada de un sistema de dominación en el plano de la sociedad civil (lo que dio un sistema estatista de dominación en consecuencia) y una amenaza constante del adversario exterior, hereditaria sí pero también alimentada actualmente por la cuestión centroamericana y por el petróleo, el mar territorial, los braceros, etcétera (otra fuente de reafirmación del Estado).

La hipótesis dice entonces que ante cualquier desbordamiento del orden provocado por algún exceso de “nacionalismo-revolucionario” gubernamental (o monetarista), por alguna maniobra financiera o de otro tipo venida de las clases altas o de sus aliados naturales extranjeros, o ante cualquier escalada provocada por una retroalimentación de estos comportamientos, la derivada de la acción social tomaría un cauce desorganizado, plebeyo y, en última instancia, estatal-militar con unas bases de legitimidad preponderantemente populares y nacionales, más que una vía, para decirlo rápido, burocrático-autoritaria (directamente favorable a la burguesía monopolista asociada al capital extranjero y a sus aliados más cercanos). Digamos, con otra imagen, que México es más peruano, más orientalmente latinoamericano, a pesar de su mayor grado de desarrollo, que burocrático-autoritario, en el estricto sentido de los países del Cono Sur.

Como ha quedado claro en tantas ocasiones, estas masas oprimidas tienen un oído muy atento a las desavenencias de “la familia real” (o “la familia revolucionaria” en tal caso): cuando algún plato rompe los ventanales y la música deja de tocar en palacio no puede haber duda: los mecanismos de coerción y el orden en general están siendo debilitados. Lo mismo da si es la policía contra el ejército, como en el Perú, De la Madrid contra Paniagua y Fidel, el grupo Monterrey contra Echeverría, Madero y la oligarquía norteña contra el grupo de “los científicos” de Porfirio Díaz, etcétera.

Por lo demás, la rutina política de esta sociedad ha mostrado tercamente que cada vez que las clases altas se fortalecen al punto de desafiar al Estado (visto como algo externo a ellas, o bien detentado por otra fracción oligárquica), lo que de ahí resulta no es sino la pulverización reiterada de ese inicio de sociedad civil en robustecimiento, como consecuencia de la activación popular. Así sucedió con las clases acaudaladas cuando fue debilitada la Corona española, así sucedió en la Revolución, momentos que a final de cuentas terminan siendo formas ciegas de autoanulación de las clases altas.

Naturalmente las cosas no tienen una mecánica idéntica en las inmediaciones del año 2000; lo que hemos llamado la sociedad mejor integrada al desarrollo y en última instancia el Estado mismo, disponen de poderosos mecanismos para anticipar o matar en ciernes la derivación plebeya y de desorganización implícita en esta matriz societal. Se trata sin duda de las fuerzas armadas y de su carácter de garantes del orden existente y, en esa medida, garantes de las clases favorecidas por este orden.

La cuestión militar es entonces un tema que debe ser analizado en su contexto específico, sociopolítico e histórico, y esto nos conduce a una resultante más:

d] En el caso mexicano la emergencia militar puede ser el resultado de alguna de las vías mencionadas anteriormente o de una combinación de ellas, pero en cualquier eventualidad podríamos preguntarnos si cuentan los militares mexicanos siendo México un país frontera con el más poderoso del mundo y siendo Estados Unidos una amenaza geopolítica por excelencia, con una justificación ética e histórica que les permita ponerse al servicio (incluso si fuera a corto plazo) de un orden que favorezca directamente los intereses de un actor transnacional como es el empresariado asociado. Ya el propio O'Donnell lo dice refiriéndose a los regímenes militares del Cono Sur, en donde “muchos de los miembros (de las fuerzas armadas) expresan su inconformidad con el énfasis en la transnacionalización de la economía que conlleva la alianza con la alta burguesía”.⁴⁵

Sea como sea, y conscientes de que mucho de esto depende de situaciones muy específicas y absolutamente impredecibles, parece difícil imaginar en el caso de nuestro país la instauración de un tipo de régimen que, por un

⁴⁵ G. O'Donnell, “Tensions in the...”, *op. cit.*, p. 304.

lado, desactive esa olla de “movilización despolitizada” que es nuestro sistema político, y luego, suponiendo que esto se lograra, fuera capaz de convertirse en un instrumento dócil a la política neoliberal del sector privado, despreciando así las enormes bases de poder que podría otorgarle el manejo de las masas y la espontánea reconstrucción del sistema piramidal-caciquil de representaciones (¿cómo no incorporaría esa enorme cantidad de líderes que dichas masas generan continuamente?). Quién sabe, por lo demás, si la clase obrera podría ser controlable sin sus aparatos piramidales, represivos y corruptos o cuál podría ser el costo de los mecanismos represivos que sustituyeran al complejo entramado sindical que constituye la columna vertebral del actual sistema político (aunque, dicho hoy, en febrero de 1983, parece claro que algunos componentes del nuevo equipo de gobierno están dispuestos a entender lo anterior).

Dejemos estos temas para estudios mejor informados. Conformémonos aquí con recordar que no parece obvio, tampoco, que los sectores medios tengan el peso relativo y la tradición política y cultural como para hacer imperar un orden basado en la sociedad civil, una especie de salida “civilista” paulatina del régimen militar con formas democráticas restringidas, o nuevas formas de “hacer política” sin salir a la calle, como parecería ser el caso ideal buscado, según Antonio Garretón, por algunos regímenes del Cono Sur.

B. La ruptura de las distancias: derecha e izquierda por la vía de “los pequeños pasos”

La segunda vía de que las clases altas, especialmente la burguesía monopolista, disponen para colocar el aparato estatal al servicio de sus intereses o, al menos, incrementar su influencia en este sentido, sería la implementada a través de formas no violentas, que no afecten la continuidad del orden público. Sería el caso, por ejemplo, de un tipo de régimen en donde lo que antes denominamos “la tecnoburocracia”, la “tecnocracia monetarista” o “el proyecto neoliberal” predominaran claramente en el interior de los aparatos decisivos del Estado: un poco lo que el *Washington Post*, antes citado, daba a entender al día siguiente del destapamiento de De la Madrid y claramente en el sentido de la polémica sobre la supremacía de los tecnócratas frente a los políticos que siguió a este suceso.

Una tal situación implicaría el recorrimiento del Estado hacia una más clara posición de clase y el abandono consecuente no nada más de la herencia masivo-popular, o el mantenimiento de una distancia realmente esquizoide respecto de ella, sino también de las posiciones nacionalistas que han “entradado” la integración de la economía mexicana dentro del cuadro de la economía mundial capitalista.

Un recorrimiento brusco del Estado a una posición de clase, aunque se lo quiera hacer aparecer como una decisión autónoma del gobierno de la

“rectoría del Estado”, podría entonces conducir al tipo de condensaciones antigubernamentales que vivimos en 1968. Frente a la fusión de los dos autoritarismos, el de la oligarquía y el del Estado, las capas medias podrían sufrir una rápida radicalización desliziándose hacia la izquierda (véase el caso de los maestros), sólo que hoy, después de seis años de un lopezportillismo que ha mantenido deprimidos los salarios de la clase trabajadora (topes salariales e inflación), fenómeno que se está viendo agudizado de manera dramática por el actual régimen, y en una época en donde la oposición se encuentra mejor organizada y con mejores medios de expresión, la coalición antigubernamental podría incorporar a amplios sectores populares y obreros, podría, incluso, atraer a eventuales desprendimientos de la clase política. Y al hablar de desprendimientos no debemos pensar sólo en algunos grupos de la izquierda del PRI sino también en sectores más estratégicos como la diputación obrera de la CTM, en su coqueteo con los partidos de la coalición de la izquierda (hoy PSUM). Más aún, las reacciones de la clase obrera, de los sindicatos y de la diputación cetemista han sido interpretadas, al menos, en las varias ópticas siguientes, todas con algún grado de viabilidad que depende de las situaciones específicas, pero en ninguna de ellas se ve como una utopía un desplazamiento de la clase trabajadora abandonando su tradicional alianza gubernamental. Una posición poco optimista respecto a la autonomización de la clase, pero no necesariamente contraria a lo expresado, es la sostenida, entre otros, por Aguilar Camín cuando afirma que

el papel que el Estado asigna y espera de sus trabajadores organizados [es] un papel similar al que solía conferir al tan maltrecho partido de las mayorías: ir adelante del Estado, rebasarlo continuamente en lo ideológico y en lo pragmático, constituirse en el flanco izquierdo institucional pero exigente, suficientemente visible para permitirle al Estado negociar con su derecha [...] Durante el último quinquenio la clase obrera organizada ha sostenido frente al Estado tanto propuestas de reformas estructurales como peticiones concretas que lo rebasan por la izquierda. Entre las primeras hay que contar el paquete de medidas (intervención estatal y nacionalizaciones del programa de reforma económica), destinado hasta hoy a adornar el archivo de la Cámara de Diputados, y la propuesta de una alianza obrera campesina como posible salida a la crisis productiva en el campo [...] Si este [quinquenio] ha sido de propuestas y radicalización ideológica del movimiento obrero organizado, no ha habido en ello capricho teórico ni súbita transformación política de sus dirigentes sino la necesidad de responder a la inconformidad creciente de las bases.⁴⁶

La conducta de las organizaciones obreras se puede ver también desde enfoques quizá demasiado entusiastas como el que propone Jorge Hernández Campos cuando dice que “si alguien está trabajando activamente para desplazar el sistema hacia el nuevo centro equilibrador representado por los socialistas europeos, ese es, ante la miopía del sistema, Fidel Velázquez,

⁴⁶ Aguilar Camín, *Unomásuno*, abril de 1981 (“Los obreros frente al Estado”).

a quien le es posible actuar inmediatamente en concreto (en comparación con la izquierda mexicana), libre de disputas o de trabas definitorias aunque con el enorme obstáculo del aparato mismo a cuya preservación contribuyó durante casi medio siglo".⁴⁷

Hemos asistido así, en los meses recientes, a un hecho genuino: los legisladores de la Coalición de Izquierda han propuesto unirse a sus colegas cetemistas para procurar la aprobación de iniciativas en las que haya coincidencia. "Esto no es imposible por principio —dice Carlos Pereira—, como lo muestran los escasos precedentes y el reconocimiento del subcoordinador de la diputación obrera priísta en agosto de 1981, de que había la posibilidad de trabajar juntos, porque en última instancia son las mismas demandas y benefician a la misma clase trabajadora".⁴⁸

Pero lo que no fue solamente genuino sino salió de todas las reglas del juego fue lo que sucedió en diciembre de 1981, cuando, a raíz del aislamiento de que fueron objeto los legisladores de la CTM por los otros sectores del PRI, declaró el diputado Arturo Romo, ex colaborador de García Paniagua: "las iniciativas cetemistas van a ser vinculadas con las de las izquierdas [...] 'se las va a meter en un paquete junto con las de la oposición en busca de una conclusión satisfactoria'".⁴⁹

Fidel Velázquez había ya previsto esta posibilidad cuando declaró el 10 de diciembre que el movimiento obrero "no acepta ningún tipo de alianzas con la oposición y no dará ocasión para que otros partidos se aprovechen de estos incidentes".⁵⁰

Como quiera que sea, jugar en los límites no significa tener todas consigo de manera que en el momento por el que pasan la CTM y la diputación obrera existen mejores posibilidades para la discusión y la confrontación y, por ello, la alianza "entre movimiento obrero y gobierno estará cada vez menos restringida a las negociaciones palaciegas y resultará más clara, precisa y abierta".⁵¹

En la opción que ahora analizamos, en donde el Estado deviene Estado de clase (por presiones desde la clase y por reorientación de la tecnoburocracia política), la alianza antigubernamental podría adquirir dimensiones mayúsculas, pluriclasistas, que, por lo demás, no son para nada extrañas a la historia de las grandes luchas sociales mexicanas. Ante el autoritarismo estatal, convertido en adversario, se vuelve rápidamente factible la identidad, en la misma lucha, de actores que en otras condiciones no tienen nada en común y que, por ello mismo, una vez conseguido el primer paso (el debilitamiento o la caída del oponente), se desagregan en infinidad de tendencias que pueden degenerar a su vez en las formas de lucha más descompuestas y en las más enrarecidas reagrupaciones.

⁴⁷ Jorge Hernández Campos, *Unomásuno*, 3 de noviembre de 1981.

⁴⁸ Carlos Pereira, *Unomásuno*, 28 de agosto de 1981.

⁴⁹ Jorge Hernández Campos, *Unomásuno*, 15 de diciembre de 1981.

⁵⁰ Fidel Velázquez, *Unomásuno*, 10 de diciembre de 1981.

⁵¹ Raúl Trejo Delabre, *Unomásuno*, 4 de octubre de 1981.

¿Podría pensarse, sin embargo, que algún tipo de eventual “nueva izquierda” mexicana (formada por los sectores obreros más avanzados, por la oleada progresista del sindicalismo y de su dirigencia, así como por la izquierda en su nuevo impulso unificado, parlamentario y más embarcado políticamente), sería capaz de convertirse en la columna vertebral de una amplia condensación antigubernamental?

Imposible responder con precisión a algo que depende de tantos factores coyunturales, pero lo cierto es que este tipo de acción puede tener tres derivaciones que dependen de su intensidad.

Puede ciertamente, en primer lugar, servir como el eje de amplias alianzas democrático-populares pero cuyo objetivo esté orientado hacia la reinstauración de la prudente distancia entre Estado y burguesía que se perdió en el ciclo anterior y que generó la alianza popular, convirtiéndose en un efectivo “flanco izquierdo” del sistema sociopolítico y provocando incluso un reacomodo institucional (tanto del PRI como de la “nueva izquierda”), pero cuidando de no minar el principio de unidad-autoridad del Estado (esa configuración histórica que he tratado de esbozar anteriormente).

Segundo, puede llegar a minar este principio o apuntar claramente hacia allá provocando como respuesta una represión violenta y haciendo pasar al primer plano a las fuerzas armadas (otro 2 de octubre, o algo aún más grave, puesto que estamos hablando de la clase obrera en el centro de la movilización, ¿otra Polonia?).

Tercero, y lo que significaría sin duda la gran catástrofe, puede también debilitar el principio de unidad-autoridad del Estado, llegar a ese punto de *non retour*, pero sin ser objeto de una reacción represiva unificada por parte de los aparatos de coerción (producto de divisiones en el seno del ejército, por ejemplo, reproduciendo los propios desgarramientos de la clase política).

La pregunta, llegados a este punto, es reiterativa: ¿Es posible pensar que la dimensión clasista-obrera, tomada en su expresión amplia: laboral-sindical-partidaria (para incorporar una eventual “nueva izquierda”), se convierta en la columna vertebral de una extensa lucha social, en un actor capaz de producir una hegemonía alternativa, una “nueva condensación intelectual y moral” que recoja las raíces populares y nacionales así como las más actuales exigencias democráticas de la vertiente mejor integrada de la sociedad?

O bien, quizás más adecuado para el caso de México sea pensar en el camino contrario: ni acumulación de fuerzas a la manera leninista ni construcción de una nueva hegemonía en una más elevada condensación intelectual y moral como la propuesta por Gramsci, sino un vaciamiento, una parcelación de la extensa alianza antiestatal formada en el primer impulso, el que logra romper el orden. Vaciamiento por el lado de los sectores medios, por la derecha en lo esencial, si forzamos los términos huyendo de la potencial explosión de anarquía que amenaza a las

pequeñas posesiones tan caras a esos estratos sociales —coche, casa, consumo—; vaciamiento entonces hacia la lógica de la mayor integración, integración democrática, conducta antiautoritaria, posesiva, individualista, del mejor ingreso; y vaciamiento hacia abajo, hacia el pueblo, hacia la lógica masivo-popular drenando consigo a una parte de la clase obrera más explotada, de menor calificación, la que hoy es pasto del liderazgo “charro”, paternalista-autoritario; vaciamiento hacia el lumpenproletariado, la marginalidad social, la lucha social desorganizada, hacia la pobreza que “vive al día” y se agudiza en una época de desorden.

Diseminación entonces más que acumulación de fuerzas, recomposición del escenario y de los actores, que pueden quedar adscritos a biparticiones lejanas a la distribución clasista y más acordes a las facciones, todas luchando en nombre de la nación y del pueblo, sin duda, reclutando así nuevas fuerzas y ganando mejores posiciones, más acordes con las necesidades de la guerra, de la redistribución más propiamente militar y no de clases o de ideologías (sobre todo si la unidad de las fuerzas armadas no es muy clara desde un inicio y si el adversario exterior no hace su aparición en el corto plazo).

Quizás la extrapolación comienza a ser excesiva porque, a pesar de todo, el ejército ha adquirido un alto nivel de profesionalización y la sociedad civil mexicana ha embarnecido con todo y lo titubeantes, recientes y continuamente minados desde el Estado que hayan sido sus contrafuertes y casamatas (para seguir con la imagen gramsciana).

Pero tampoco imposible, esta imagen, en un país en el que desde los aparatos mismos de ejecución del Estado, pasando por las instituciones del sistema político (el partido oficial, el ejército, el parlamento, el sistema judicial, el sindicalismo, etcétera), hasta incluir a las interpretaciones dadas a la historia nacional y a las leyes, especialmente a los grandes preceptos de la Revolución mexicana y de la Constitución, dependen en amplia medida, para alcanzar algún grado de unidad y una coherencia, de un solo punto en el sistema y del hombre que lo ocupa cada seis años: del presidente de la república.

No es pues, ni fue nunca, un sistema sociopolítico guiado por una concepción del mundo clasista-económica o por un andamiaje ideológico hecho por intelectuales en nombre de una clase que deviene partido y Estado, ni tampoco una sociedad autorregulada por fuerzas democráticas en concurrencia, según un “contrato social” más o menos respetado. Ha sido y sigue siendo una tremenda concentración de fuerza, de autoridad en consecuencia, que nace y se reproduce en el ejercicio de una continua e infatigable tarea que consiste en fortalecer para balancear, romper para unificar, reprimir, reconfortar, cooptar, matar, distribuir, corromper para, fundamentalmente, mantener el orden y la continuidad y en consecuencia mantener el principio estatal ante todas las cosas, buscar naturalmente ser la única autoridad del régimen pero no debilitarlo en esa tarea ni apelar si el resultado es desfavorable. Un complejo que funciona en términos esencialmente políticos sin ideología o con un mínimo de principios, mien-

tras más generales mejor, en donde las fuerzas de la economía actúan libremente haciendo dinero y respetando (hasta ahora) las reglas de la política, en el seno de un sistema definido por un Estado que es también la economía, guiado casi exclusivamente por una orientación pragmática, política casi en forma pura y todo ello para qué, "para resolver las contradicciones ;para nada! ;para seguir!", según lo definió un militante del PRI.

Así pues, no habría tampoco que confiar mucho en la resistencia de las casamatas y los contrafuertes en donde el todo depende aún tan estrechamente de un sistema presidencialista en donde las ideologías y las pertenencias socioeconómicas son débiles influjos para modelar el tejido social y en donde el sistema político, a pesar de corresponder a una sociedad concentradamente política, expresa y ordena tan mal al sector más moderno y mejor integrado a la amplia lógica democrático-clasista (Irán en cierta forma también parecía muy avanzado en su modernización).

8. Conclusión

Sin embargo no han sido los amplios sectores populares, los más paupérrimos digamos, quienes han hecho política en los últimos dos decenios. Es indudable que los embates más severos al sistema político de este país han venido del lado de su lógica democrático-clasista, para designar con este término a los sectores modernos mejor integrados, es decir, tanto las clases fundamentales (la burguesía y el proletariado), adversarios, con distintos signos, del poder tradicionalmente concentrado en el Estado, como a los sectores medios, democráticos por antiautoritarios y pluralistas aunque también por su individualismo posesivo y consumista que los obnubila frente a sus opciones políticas.

También es indudable que han sido los embates venidos de esta lógica democrático-clasista los que han producido los cambios y las actualizaciones más espectaculares; bajo Díaz Ordaz protestaron los sectores medios (maestros, médicos, estudiantes y profesores); con Echeverría los empresarios encabezaron lo que terminó siendo la inconformidad de la derecha (con el casi "golpe de Estado financiero" de 1976), y en fin, el sexenio de López Portillo, soterradamente, ha tenido el mismo efecto en el seno de la clase trabajadora, provocando el acercamiento entre el sindicalismo oficial, las varias formas de sindicalismo independiente (incluidas las más radicales de los sectores medios) y la izquierda, a través de la vía partidista-parlamentaria (y el régimen lamadridiano no parece desalentar esta tendencia). El movimiento estudiantil de 1968, la llamada crisis de confianza en 1976, y las tensiones entre Fidel Velázquez y De la Madrid han sido los momentos de alta tensión entre el Estado y cada una de estas tres expresiones de la sociedad civil en fortalecimiento.

La apertura democrática echeverrista, con el acceso más directo a los puestos de la enorme burocracia pública para la generación de los años sesenta y los mejores presupuestos para las universidades, así como la reforma política del sexenio pasado, con la legalización de varios partidos de la oposición y otra gran cantidad de medidas, dan muestra de que el sistema ha sabido aliviar las tensiones venidas de las clases medias por lo menos hasta antes de que fuera puesta en duda la época de bonanza económica petrolera.

Quizás el nuevo papel de la clase obrera mexicana, oficial y semioficialmente agrupada bajo el paraguas del Congreso de Trabajo (organismo corporativo de todos los sectores de esta clase y estanco que coloca a la clase obrera con una mayor autonomía frente al Estado), así como la actitud más combativa de los líderes del sindicalismo oficial puedan efectivamente servir de contrapeso, "ir adelante del Estado", rebasarlo continuamente, constituirse en su "flanco izquierdo institucional" y resolver por esta vía el problema de la marcada inadecuación del sistema político, y del PRI en lo particular, respecto a las demandas de autonomía propias de la modernización acelerada a que está sometida particularmente esta clase.

La izquierda en estas condiciones encuentra su función definida en forma menos clásica pero más efectiva, al convertirse en el puente de articulación de varios medios y en particular de los dos ahora mencionados: por una parte, la izquierda goza de la aceptación espontánea entre las clases medias, naturalmente antiautoritarias en sociedades con un Estado fuerte histórico, y expresa así un anhelo democrático reprimido, arraigando más como expresión socialista que en su manifestación comunista, leninista y centralizada; por otra parte, articular este medio democrático con el más propiamente clasista requiere, quizás, como lo han propuesto en cierta forma los partidos de la unidad de la izquierda (Partido Socialista Unificado de México, PSUM), de un largo trabajo en el seno del sindicalismo (universitario, magisterial, bancario), participar en el seno de los organismos obreros oficiales y semioficiales sin el afán, por lo demás iluso, de caballo de Troya. Más difícil se ve que la izquierda pueda tender un puente estable hacia el terreno mejor marcado por la otra gran lógica de nuestro sistema sociopolítico, la lógica Estado-pueblo o nacional-popular, si se quiere (la de las enormes masas paupérrimas, campesinas y urbanas, que constituyen las bases de poder del Estado-PRI), aunque los puntos fatigados de la dominación tradicional, autoritaria y paternalista hacen crisis continuamente, y hacia esos puntos tendrá que acudir esa izquierda, multiplicándose.

Por todas estas razones se ha vuelto tan difícil para la oposición de izquierda tomar la vía de la estricta oposición, del claro enfrentamiento antiestatal, y se la ha visto desgarrada constantemente en la disyuntiva entre participar en el sistema político existente o mantenerse radicalmente exterior a él. Hoy comienza a ser claro que incluso si desde una posición exterior y radical la izquierda pudiera haber en algún momento desestabilizado

el orden y, por alguna concatenación de factores, derrocado al Estado, el poder que en éste se concentraba, ahora un espejismo, difícilmente hubiera ido a parar a las manos de una tendencia así, postulada en los términos clásicos de la lucha de clases o, incluso, en los términos blanquistas del asalto al poder. Sin ir tan lejos, la ruptura y el enfrentamiento sin mediaciones cuando tienden al punto desorganizativo producen en nuestra sociedad una reacción represiva fulminante, y la izquierda mexicana lo sabe de memoria. A su vez, lo que ha resultado más asombroso con la reforma política es que la participación de la izquierda en el "interior" del sistema político afloja la consistencia de ese Estado, en otras condiciones monolítico, y pone a flote sus contradicciones y sus incoherencias pero también coloca en una posición más adecuada a los detentadores del Estado para visualizar los problemas y para inventar soluciones. ¿"¡Todo el poder al reformismo!" tendremos que decir junto con algunos socialistas españoles?

Por último, quien no parece encontrar un canal estable de relación con el Estado es el tercer actor de la sociedad integrada: el empresariado y, en cierta forma también, la derecha como un todo. O se distancia totalmente del Estado o parece estar amalgamada a él provocando las condenaciones y tormentas de cada situación. Y es que en este nivel no parece fácil establecer una arena política de concurrencia si tomamos en cuenta las profundas reticencias, propias de esta clase, a todo lo que sean formas de participación ampliada y aparatos públicos, "fantasmas populistas", su gran predilección por las sorpresas y sobresaltos económicos y financieros, por los arreglos palaciegos a través de la burocracia financiera y su predilección, también, por los ensimismamientos y displicencias expresados a través de los "aparatos ideológicos" de que dispone (especialmente la televisión). Así, si bien se puede afirmar que la iniciativa privada posee ya todos los mecanismos necesarios para derrumbar al Estado, lo cierto también es que no posee ninguno para sustituirlo.

Quien tiene más necesidad de seguir con lo que hay y sin embargo está resultando más radical y más intransigente para "hacer política" en México es la burguesía y su robusto brazo tecnocrático-freedmaniano en el sector público. Quizás le toque el papel, una vez más para su desgracia, de ser el detonador de la revolución social.

¿Están pues, el Estado y el sistema político mexicanos, reproduciendo de alguna manera los rasgos que han caracterizado a los regímenes burocrático-autoritarios del Cono Sur? No parece ser el caso, a pesar de que algunas medidas nerviosas del nuevo gobierno hacen pensar que la sola orientación tecnocrática resulta unidimensional e inadecuada para comprender la doble lógica de nuestro sistema sociopolítico y para actuar sobre él como Estado, único actor capaz de darle unidad y coherencia.